

Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su considerando quinto a noveno, que se elimina.

Y teniendo, además, presente:

1°.- Que Gendarmería de Chile dispuso el traslado del amparado desde el centro penitenciario de Puerto Montt al establecimiento de Valparaíso, fundando dicha decisión en la necesidad de descongestión del penal de origen.

2°.- Que, el amparado solicita ser devuelto a la unidad penal de origen, atendido que su familia reside en la Décima Región, apoyo familiar que resulta favorable para su proceso de reinserción;

3°.- Que, para la cuestión debe considerarse que Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad respetando el arraigo del condenado a su lugar de residencia y el de sus familiares que pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debió ser sopesado, pues los antecedentes invocados dan cuenta de su domicilio en la Décima Región, sin que se expresen los motivos que impiden el traslado a un recinto penitenciario que se emplace en la misma región o más cercano a ella;

4°.- Que, en este contexto, aparece que el traslado dispuesto carece de motivos suficientes que la justifiquen, deficiencia que hace que aquélla sea ilegal



y, también, desproporcionada al mantener al amparado en un establecimiento penal fuera de la región donde tiene su domicilio y su familia, alejándose de lo dispuesto en el artículo 53 inciso segundo del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que establece que “En resguardo del derecho a visitas, los condenados deberán permanecer reclusos preferentemente cerca de su lugar habitual de residencia”, frustrando toda posibilidad de resocialización y apoyo familiar;

5°.- Que, finalmente, Gendarmería no dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en cuanto dispone que: El régimen de los detenidos, sujetos a prisión preventiva y penados se sujetará a lo establecido en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, la ley procesal pertinente, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y otras leyes y reglamentos relacionados con materias penitenciarias, y las normas del presente reglamento”.

En la especie, la resolución impugnada evidentemente no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1 ° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento. Tales derechos se pueden ver conculcados en la especie, toda vez que de una parte no se ha justificado que la mantención del traslado dispuesto sea necesario para garantizar la vida e integridad física o



psíquica del amparado, de otros internos, y especialmente no se señala razones que justifiquen que dicha medida se realice a un recinto penitenciario fuera de la región; y de otra, porque se dificulta notablemente el traslado de la familia del recurrente a un recinto penitenciario localizado en otra región del país.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo prevenido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de uno de abril de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el Ingreso Corte N° 81-2025 y, en su lugar, se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto a favor de CRISTOFER ANÍBAL ESCOBAR NAHUELHUEIQUE, disponiéndose a la brevedad, el traslado al recinto penitenciario de la Décima Región de Los Lagos, que determine Gendarmería.

Regístrese y devuélvase.

Rol 11213-2025





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y los Abogados (as) Integrantes Carlos Antonio Urquieta S., Eduardo Nelson Gandulfo R. Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a dieciséis de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

